

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



**JUZGADO VEINTISIETE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.  
SECCIÓN SEGUNDA**

AUTO INTERLOCUTORIO:	762
RADICACIÓN:	11001-33-35-027-2022-00202-00
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	LUZ KARIME SAAIBI SOLANO
DEMANDADA:	LA NACIÓN-PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ASUNTO:	Niega suspensión provisional efectos actos acusados

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023).

**I. ASUNTO**

Se decide la solicitud de suspensión provisional de los efectos del Decreto 1371 expedido el 29 de noviembre de 2022 por la Procuradora General de la Nación, mediante el cual se declaró insubsistente el nombramiento de la demandante en el cargo de Asesor grado 24 con funciones en el Instituto de Estudios del Ministerio Público, y del Oficio No. S-2022-111169 del 7 de diciembre de 2022.

**II. ANTECEDENTES**

La señora Luz Karime Saaibi Solano, por conducto de apoderado especial, incoó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra La Procuraduría General de la Nación y como medida cautelar deprecó la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo acusado, pues sostuvo que gozaba de estabilidad laboral reforzada por su condición de pre-pensionada y, además, cumple los requisitos del artículo 231 del CPACA.

Del escrito cautelar se corrió el traslado previsto en el inciso 2 del artículo 233 del CPACA, oportunidad en la cual el apoderado de la parte demandada señaló que la actora pretende que se resuelva el fondo del litigio en la etapa preliminar de medidas cautelares, cuando aún no se cuenta con los elementos suficientes para adoptar una decisión de esa naturaleza y, además, no cumple con los requisitos legales para decretarla.

Sostuvo que la demandante, al ser nombrada en un cargo de libre nombramiento y remoción, conocía de antemano que en virtud del artículo 165 del Decreto 2652 de 2000 podía ser desvinculada del servicio por voluntad discrecional de la Procuradora General de la Nación.

Citó las sentencias dictadas dentro de la acción de tutela promovida por la parte actora, la de primera instancia emitida por el Tribunal Superior de Bogotá el 18 de enero de 2023 y la de segunda instancia por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 8 de febrero de 2023, que la declararon improcedente.

Concluyó que el acto administrativo de retiro se ajustó a derecho, por tratarse de un cargo de libre nombramiento y remoción, y solicitó que se niegue la medida cautelar.

**III. CONSIDERACIONES**

El artículo 238 de la Constitución Política consagra que *“La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo podrá suspender provisionalmente por los motivos y con los requisitos que*

establezca la ley, los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial”.

A su turno, el artículo 229 del CPACA prevé que “En todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el juez o magistrado ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo. La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento” (Subrayado fuera de texto).

Por su parte, el artículo 231 *ibídem* prescribe que “Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos” (Subrayado fuera de texto).

La suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo constituye una excepción a la presunción de legalidad de la cual está investido, de manera que por su trascendencia el legislador dispuso que su viabilidad requiere que la solicitud esté debidamente motivada, que la infracción de las normas superiores en que se fundó o debía afincarse sea manifiesta y que pruebe siquiera sumariamente los perjuicios si pretende la indemnización de éstos.

Como se trata de una medida cautelar preventiva, su finalidad es asegurar transitoriamente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, es decir, impedir la aplicación del acto administrativo impugnado y precaver eventuales perjuicios, mientras se resuelve de manera definitiva la pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho.

Sobre la naturaleza jurídica de esta cautela y sus rasgos esenciales, el Consejo de Estado ha indicado:

*“La medida de suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo como medida cautelar que es, según las voces del artículo 229 del C. de P.A. y de lo C.A., exige ‘petición de parte debidamente sustentada’, y acorde con el artículo 231 *ibídem*, procederá ‘por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud’.*

La nueva norma precisa que: 1º) La medida cautelar se debe solicitar, ya con fundamento en el mismo concepto de violación de la demanda, o ya en lo que el demandante sustente al respecto en escrito separado. Exige que la petición contenga una sustentación específica y propia para la procedencia de la medida excepcional, o una expresa remisión a que el apoyo de la medida se soporta en el mismo concepto de violación. 2º) La procedencia de la suspensión provisional de los efectos de un acto que se acusa de nulidad pueden acontecer si la violación de las disposiciones invocadas, surge, es decir, aparece presente, desde esta instancia procesal -cuando el proceso apenas comienza-, como conclusión del: i) análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas, o, ii) del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.

De esta manera, lo que en el nuevo Código representa variación significativa en la regulación de esta figura jurídico-procesal de la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo acusado, con relación al estatuto anterior, radica en que antes era exigencia *sine qua non* que la oposición normativa apareciera manifiesta por confrontación directa con el acto o mediante los documentos públicos adicionados con la solicitud. Entonces ello excluía que el operador judicial pudiera incursionar en análisis o estudio pues la transgresión debía aparecer *prima facie*. Ahora, la norma da la apertura de autorizar al juez administrativo para que, desde este momento procesal, obtenga la percepción de si hay la violación normativa

alegada, pudiendo al efecto: 1º) realizar análisis entre el acto y las normas invocadas como transgredidas, y 2º) que también pueda estudiar las pruebas allegadas con la solicitud.

Pero a la vez es necesario que el juez tenga en cuenta el perentorio señalamiento del 2º inciso del artículo 229 del CPACA, en cuanto ordena que ‘la decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento’” (Auto de 24 de enero de 2013, exp. 2012-00068-00).

Es claro, entonces, que la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo acusado supone unos requisitos formales y otros sustanciales, cuya inobservancia podrían dar al traste con la solicitud de cautela. Entre los primeros aparecen, por una parte, la sustentación de la medida, esto es, la indicación de las normas violadas y el concepto de violación, advirtiendo que tal justificación deber ser independiente de la aducida en la demanda para fundar la nulidad, es decir, una cosa es la argumentación de la suspensión provisional y otra la de la nulidad, a menos que en aquella se remita para tal efecto a esta; y por la otra, la demostración, al menos sumaria, del perjuicio que con el acto impugnado se le cause o llegare a causar, si entre sus pretensiones figura la indemnización del mismo.

En este asunto la parte actora considera que el Decreto 1371 expedido el 29 de noviembre de 2022 por la Procuradora General de la Nación, por el cual declaró insubsistente su nombramiento en el cargo de Asesor grado 24 con funciones en el Instituto de Estudios del Ministerio Público, y el Oficio No. S-2022-111169 del 7 de diciembre de 2022, vulneran su derecho fundamental al mínimo vital, al no considerar su condición de pre-pensionada, unido a que por su avanzada edad no tiene la posibilidad de vincularse laboralmente, lo cual le impide seguir cotizando para consolidar el derecho a la pensión de vejez.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 231 del CPACA, es requisito sustancial para que proceda la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo, que la violación de las normas superiores citadas como infringidas, surja del análisis de la decisión acusada y su confrontación con tales preceptos o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud, por lo que corresponde acometer esa tarea a continuación.

El Consejo de Estado, mediante sentencia del 7 de febrero de 2019, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez, radicación interna No. 5418-18, determinó que una vez se analizaron los artículos 229 a 231 del CPACA, los requisitos para decretar las medidas cautelares se clasifican en tres categorías, consistentes en: i) requisitos formales, ii) requisitos materiales y iii) requisitos de procedencia específicos. Véase:

*“De las normas antes analizadas<sup>1</sup> se desprende, que los requisitos para decretar las medidas cautelares se pueden clasificar en tres categorías, a saber: (i) requisitos de procedencia, generales o comunes, de índole formal, (ii) requisitos de procedencia, generales o comunes, de índole material, y (iii) requisitos de procedencia específicos (...).*

**6.3.1.- Requisitos de Procedencia, Generales o Comunes de Índole Formal.** La Sala los denomina «generales o comunes» porque se exigen para todas las medidas cautelares; y son de «índole formal», en la medida que solo requieren una corroboración de aspectos de forma y no un análisis valorativo. Entonces, los requisitos de procedencia, generales o comunes,<sup>2</sup> de índole formal,<sup>3</sup> son: **(1)** debe tratarse de procesos declarativos o en los que tienen por finalidad la defensa y protección de derechos e intereses colectivos que conoce la jurisdicción de lo contencioso administrativo;<sup>4</sup> **(2)** debe existir solicitud de parte<sup>5</sup> debidamente sustentada en el texto de la demanda o en escrito separado, excepto en los casos de los procesos que tienen por finalidad la defensa y protección de derechos e intereses colectivos donde opera de oficio<sup>6</sup>.

**6.3.2.- Requisitos de Procedencia Generales o Comunes de Índole Material.** La Sala los denomina «generales o comunes» porque se exigen para todas las medidas cautelares; y son

<sup>1</sup> Ley 1437 de 2011, artículos 229, 230 y 231.

<sup>2</sup> En la medida que se exigen para todas las medidas cautelares.

<sup>3</sup> En la medida en que estos requisitos únicamente exigen una corroboración formal y no un análisis valorativo.

<sup>4</sup> Artículo 229, Ley 1437 de 2011.

<sup>5</sup> De conformidad con el parágrafo del artículo 229 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, las únicas medidas que pueden ser declaradas de oficio por el juez son las “medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos del conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.

<sup>6</sup> Artículo 229, Ley 1437 de 2011.

de «índole material», en la medida que exigen por parte del juez un análisis valorativo. Entonces, los requisitos de procedencia, generales o comunes,<sup>7</sup> de índole material,<sup>8</sup> son: **(1)** que la medida cautelar solicitada debe ser necesaria para proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia;<sup>9</sup> y **(2)** que la medida cautelar solicitada debe tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda<sup>10</sup>.

23. Respecto del primer requisito de procedencia, general o común, de índole material, esto es, que la medida cautelar solicitada debe ser necesaria para proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso, la Sala aclara que el «objeto del proceso», desde un primer nivel de significación, que se corresponde con la teoría procesalista clásica, es la materia o cuestión del litigio, el «thema decidendi» que se somete a consideración de la jurisdicción, e involucra, no sólo las pretensiones, sino que también hace referencia a los hechos, normas y pruebas en que estas se fundan.

24. Ahora bien, desde un punto de vista constitucional de aplicación del principio de primacía del derecho sustancial,<sup>11</sup> el «objeto del proceso», y en general «de todo proceso que se adelante ante la jurisdicción contencioso administrativo», también comprende, en armonía con el artículo 103 de la Ley 1437 de 2011,<sup>12</sup> la finalidad de asegurar la «efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política y la Ley y la preservación del orden jurídico». Dicho de otro modo, el objeto de todo proceso judicial es en últimas, garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales. En ese sentido, el decreto y ejecución de una medida cautelar también debe conciliarse con el postulado superior relativo al respeto de los derechos fundamentales de las personas, siempre que estos no estén en discusión, aclara la Sala.

25. Así pues, es claro para la Sala, que el juez contencioso debe evaluar con especial cuidado si la medida cautelar solicitada en verdad está orientada a garantizar el objeto del proceso, puesto que al ordenar su decreto también se pueden lesionar las prerrogativas fundamentales de los perjudicados con las medidas cautelares. Ante tales circunstancias, las autoridades judiciales deben propender por aplicar las normas pertinentes al caso concreto, de manera tal que logre el menor perjuicio posible a los derechos fundamentales, siempre que estos no estén en discusión, se reitera.

26. Finalmente, ya para agotar lo que tiene que ver con el primer requisito de procedencia, general o común, de índole material, la Sala precisa que respecto de la exigencia de que la medida cautelar solicitada esté orientada a garantizar la efectividad de la sentencia, ello se explica en razón de que con las cautelas se busca asegurar el cumplimiento de las decisiones del juez, es decir, que propenden por la seriedad de la función jurisdiccional, y por esta vía, guardan relación directa con los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y de tutela judicial efectiva, en la medida que con las medidas cautelares también se asegura que las decisiones de los jueces sean ejecutadas y cumplidas.

**6.3.3.- Requisitos de Procedencia Específicos de la Suspensión Provisional de los efectos del acto administrativo.** La Sala los denomina «requisitos de procedencia específicos» porque se exigen de manera particular para cada una de las diferentes medidas cautelares enlistadas, a modo enunciativo, en la Ley 1437 de 2011<sup>13</sup>. Entonces, en cuanto a los requisitos de procedencia específicos, si se pretende la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del acto administrativo demandado -medida cautelar negativa-, se deben tener en cuenta otras exigencias adicionales que responden al tipo de pretensión en el cual se sustente la demanda<sup>14</sup> así: **(a)** si la demanda tiene únicamente la pretensión de nulidad del acto administrativo demandado, se debe verificar que exista una violación de las normas superiores invocadas, tras confrontar el acto demandado con estas o con las pruebas aportadas con la solicitud;<sup>15</sup> y **(b)** si la demanda además de la nulidad del acto administrativo pretende el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios, además de

<sup>7</sup> En la medida que se exigen para todas las medidas cautelares.

<sup>8</sup> En la medida en que exigen por parte del juez un análisis valorativo.

<sup>9</sup> Artículo 229, Ley 1437 de 2011.

<sup>10</sup> Artículo 230, Ley 1437 de 2011.

<sup>11</sup> Artículo 228 de la Constitución Política de 1991. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será descentralizado y autónomo.

<sup>12</sup> Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

<sup>13</sup> Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

<sup>14</sup> Por esta razón en el acápite de antecedentes de esta providencia se hizo alusión al medio de control ejercido por el demandante y a las pretensiones de la demanda, toda vez que el legislador en la Ley 1437 de 2011 puso estos como elementos determinantes para el tipo de requisitos que el juez debe analizar al momento resolver sobre el decreto de la medida cautelar.

<sup>15</sup> Artículo 231, inciso 1°, Ley 1437 de 2011.

*verificarse que exista una violación de las normas superiores invocadas, debe probarse al menos sumariamente la existencia de los perjuicios”.*

De otra parte, en la sentencia C-795/09, la Corte Constitucional definió el concepto de pre-pensionado y su alcance en los siguientes términos:

*“(i) [Definición de pre-pensionado:] (...) tiene la condición de pre-pensionado para efectos de la protección reforzada reconocida por el legislador a sujetos de especial vulnerabilidad, en el contexto de procesos de renovación de la administración pública, el servidor público próximo a pensionarse al cual le falten tres (3) o menos años para reunir los requisitos de edad y tiempo de servicio o semanas de cotización para obtener el disfrute de la pensión de jubilación o vejez; (ii) El momento a partir del cual se [debe contabilizar] el parámetro temporal establecido para definir la condición de pre-pensionado (...). En relación con el (...) momento histórico a partir del cual se contabilizarían esos tres (3) años [previos al cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de vejez], este debe adecuarse al nuevo contexto normativo generado por la expedición de la Ley 812 de 2003 y el pronunciamiento de la Corte efectuado en la sentencia C-991 de 2004 sobre esta norma. En ese nuevo marco, la jurisprudencia ha estimado que el término de tres (3) años o menos, debe contabilizarse a partir de la fecha en que se declara la reestructuración de la entidad de la administración pública; (iii) [sobre la extinción de la protección en el tiempo], es decir el lapso durante el cual es posible mantener la protección de estabilidad reforzada para las personas próximas a pensionarse, la jurisprudencia ha desarrollado un criterio uniforme aplicable a todos los grupos protegidos por la Ley 790 de 2002 (madres y padres cabeza de familia, discapacitados y pre-pensionados), consistente en que dicha protección solamente puede ser sostenida durante el tiempo por el cual se prolongue el proceso de liquidación, y hasta la extinción material y jurídica de la entidad sometida a dicho proceso (...).”*

También se pronunció ese alto tribunal, mediante sentencia de unificación, sobre los pre-pensionados que ocupen cargos de libre nombramiento y remoción, a saber:

*“Por regla general, los empleados públicos de libre nombramiento y remoción no gozan de estabilidad laboral reforzada, pues ello supondría desconocer, de modo absoluto, la finalidad o naturaleza de estos empleos, es decir a la confianza plena y total o el tipo de funciones (de dirección, manejo, conducción u orientación institucional (...).*

*Que la condición de pre-pensionado no excluye el ejercicio de la facultad discrecional del nominador, pero se debe analizar la afectación de derechos fundamentales. Además, se puso de presente que la condición de pre-pensionado no es suficiente para ordenar el reintegro del trabajador, sino que se requiere demostrar que la desvinculación pone en riesgo los derechos fundamentales del empleado, respecto de lo cual la edad es un indicador de la dificultad de integrarse al mercado laboral, pero que esta circunstancia se debe analizar junto con las posibilidades de percibir ingresos de otras fuentes<sup>16</sup>”.*

El Consejo de Estado también ha señalado que los pre-pensionados son sujetos de especial protección, pero dicha circunstancia no impide el ejercicio de la potestad discrecional de remoción<sup>17</sup>.

Conforme a lo anterior y descendiendo al caso concreto, se advierte que la solicitud cautelar cumple con el primer “requisito común de índole formal”, pues la señora Luz Karime Saaibi Solano, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó la nulidad del Decreto 1371 expedido el 29 de noviembre de 2022 y del Oficio No. S-2022-111169 emitido el 7 de diciembre de 2022, mediante los cuales se declaró insubsistente su nombramiento en el cargo de Asesor grado 24 con funciones en el Instituto de Estudios del Ministerio Público.

En cuanto a los “requisitos comunes de índole material”, la jurisdicción ha predicado que sobre estos hay unos sub-requisitos, a saber: i) que la medida cautelar sea necesaria para proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, y ii) que la cautela tenga relación directa con las pretensiones de la demanda.

<sup>16</sup> SU-003 de 2018

<sup>17</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 25 de febrero de 2021, expediente 66001-23-33-000-2016-00693-01, M.P. Dr. Gabriel Valbuena Hernández.

Justamente sobre el primer requisito, es evidente que al examinar la solicitud de suspensión provisional de los actos administrativos demandados y las pruebas aportadas con el libelo se constata que no es materialmente necesaria para la protección del objeto litigioso y la efectividad de la sentencia que adopte el juzgado, ya que la parte demandante no acreditó la vulneración ostensible de su derecho fundamental al mínimo vital, pues tal aseveración no fue acompañada de ningún soporte probatorio y, por el contrario, se limitó a señalar que su único ingreso era su salario y que por su edad no tiene posibilidad de acceder a un nuevo empleo, la cual, si bien a juicio de la actora constituye una afirmación indefinida que al tenor del artículo 167 del CGP no requiere prueba y, por ende, le correspondería a la parte demandada desvirtuarla, lo cierto es que ese debate no puede dilucidarse en esta etapa temprana del proceso y lo más razonable es posponer su valoración en la sentencia.

Además, por su edad, la demandante no es un sujeto de especial protección constitucional, conforme a la jurisprudencia constitucional vigente, pues para el año 2023 es considerada como persona adulta mayor quien supera la esperanza de vida fijada por el Departamento Nacional de Estadística, esto es, 80 años de edad para mujeres y 76 años de edad para hombres<sup>18</sup>, y teniendo en cuenta que la señora Luz Karime Saaibi Solano cuenta con 56 años de edad no es una persona de avanzada edad, como lo sugiere su apoderado.

Corolario, no siendo necesaria la medida cautelar implorada para proteger y garantizar el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, y dado que para establecer la vulneración de las normas invocadas como infringidas se requiere un análisis exhaustivo de los actos administrativos demandados y de las pruebas valoradas en vía administrativa y las que se aporten en sede judicial, estudio propio de la sentencia, se concluye que no se cumple el primer requisito de procedencia común de carácter material para acceder a la suspensión provisional solicitada, lo cual releva al juzgado de analizar si se reúnen o no los restantes requisitos sintetizados por el Consejo de Estado y, por ende, se negará el decreto de esa medida cautelar.

En mérito de lo expuesto, se dispone:

1. NEGAR la solicitud de suspensión provisional de Decreto 1371 expedido el 29 de noviembre de 2022 y del Oficio No. S-2022-111169 expedido el 7 de diciembre de 2022, impetrada por la parte demandante.

2. PROSEGUIR con el trámite del proceso.

3. RECONOCER al Dr. Rafael Andrés Valenzuela Bueno, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.793.679 expedida en Bogotá y titular de la tarjeta profesional de abogado No. 293866 otorgada por el Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado de la parte demandada, en los términos y para los fines conferidos en el poder y de acuerdo con los anexos obrantes en el expediente digital<sup>19</sup>.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

**HUMBERTO LÓPEZ NARVÁEZ**  
Juez

CRR

Auto 1 de 2

---

<sup>18</sup> T-083-2023

<sup>19</sup> Documento digital 12

**Firmado Por:**  
**Humberto Lopez Narvaez**  
**Juez**  
**Juzgado Administrativo**  
**027**  
**Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,  
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **6ae711f1bc14754520f5375814d60ef6527214ae86e9b35548e09067def401e1**

Documento generado en 23/11/2023 12:02:17 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**